

LA POBREZA Y EL CRÉDITO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y LA VULNERABILIDAD

Paulina Valenzuela ¹ – Angélica Bonilla ²

Resumen

La discusión respecto a la relación entre consumo, crédito y pobreza tiene larga data en la sociología chilena. ¿Cómo se relacionan las familias pobres con el crédito en Chile? ¿Qué aspecto de la pobreza resuelve –si es que lo hace–, y cuáles son sus limitaciones? En el siguiente artículo, pretendemos retomar estas preguntas, a la luz de una actualización del concepto y cifras de pobreza en Chile. Ésta ya no puede ser reducida a la mera carencia de ingresos, sino que se presenta como un fenómeno de exclusión multidimensional, que impide a las familias pobres acceder a los recursos sociales necesarios para desarrollarse en plenitud. En ese contexto, la masificación del crédito les permite acceder a bienes y servicios que de otra manera estarían fuera de su alcance. Sin embargo, si bien esto representa una oportunidad de inclusión social por medio de la participación en los estándares de consumo modernos, también tiene un riesgo cierto de endeudamiento crónico, que perpetúe o incluso agrave la situación de pobreza. Por otro lado, su tendencia a promover una propuesta de solución individualista y autosuficiente a problemas sociales tiene importantes consecuencias sobre la convivencia, participación y el empleo de los sectores pobres.

Abstract

The discussion regarding the relation between consumption, credit and poverty has long-standing in Chilean sociology. How do poor families relate to credit in Chile? Which aspect of poverty does credit resolve – if it does- and which are its limitations? In the following article we aim to take up these questions, in light of a renewal in both the concept of poverty and its numbers in Chile. Poverty cannot be reduced to the simple lack of income, but instead presents itself as a multidimensional phenomenon, that keeps families from accessing the social resources that are necessary in order to develop fully. In this context, the upscaling of credit allows them access to goods and services that would otherwise be out of their reach. However, even if this represents a chance for social inclusion, by means of participation in consumption according to modern standards, it also presents the risk of chronic indebtedness, which perpetuates or even worsens the already disadvantaged economic situation of poor families. On the other hand, credit's tendency to promote individualistic and self-sufficient solutions to social issues has relevant implications for the coexistence, participation and employment of the poor.

Palabras clave: pobreza multidimensional - exclusión - consumo - crédito - endeudamiento

Fecha de recepción: 01.07.2015

Fecha de aceptación: 21.07.2015

Keywords: multidimensional poverty - exclusion - consumption - credit - indebtedness

Received: 01.07.2015

Accepted: 21.07.2015

¹Licenciada y Estudiante de Magíster en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile

²Licenciada y Estudiante de Magíster en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile

¹Degree in Sociology. Master © in Sociology
Pontifical Catholic University of Chile

²Degree in Sociology. Master © in Sociology
Pontifical Catholic University of Chile

Introducción

Las transformaciones económicas y políticas de las últimas décadas han traído consigo cambios importantes en los niveles de pobreza en Chile. Junto con lo anterior, el concepto mismo de este fenómeno ha sido cuestionado, dando paso a un nuevo paradigma que la concibe como un problema de exclusión multidimensional. En el siguiente artículo, se retoma un problema de larga data en la sociología chilena, esto es, la relación entre el consumo, el crédito y la pobreza, y se resitúa la discusión en este nuevo escenario. ¿Cómo se relacionan las familias pobres con el crédito en Chile? ¿Qué aspecto de la pobreza resuelve –si es que lo hace– el crédito, y cuáles son sus limitaciones? ¿Y cómo afecta su uso a otras dimensiones clave de la vulnerabilidad social?

En la primera parte de este artículo, se analizan los cambios más importantes en los niveles y características de la pobreza en Chile durante las últimas tres décadas, al tiempo que se ofrece la perspectiva multidimensional de exclusión social como la conceptualización más adecuada en el contexto actual. En la sección siguiente, se describe el origen de la masificación del crédito en el país, como consecuencia del desarrollo económico y la consolidación de una sociedad de mercado. Aquí, el crédito aparece como fundamental para permitir la integración, de estratos socioeconómicos tanto medios como bajos, a las pautas de consumo moderno. En la tercera parte, se describen y analizan críticamente las posibilidades y limitaciones que tiene el crédito en sí como herramienta de superación de la pobreza.

Luego, esta misma discusión se revisita bajo la perspectiva de la pobreza multidimensional y la exclusión, analizando sus posibles consecuencias en otras áreas de desarrollo. Por último, en las conclusiones finales se resumen los principales argumentos del artículo.

1. La Transformación De La Pobreza En Chile

En adelante pretendemos ofrecer un análisis sobre la relación entre consumo, crédito y pobreza. A pesar de que prácticamente todas las personas tienen alguna noción sobre lo que significa la pobreza, es imposible comenzar este artículo sin precisar qué entendemos por ella, especialmente en el contexto chileno actual. Porque a pesar de ser uno de los temas que más ha preocupado a sociólogos y economistas en el país, su definición y magnitud está lejos de ser algo estático y pre-definido. Si la sociedad cambia, lo que se considera pobreza también lo hace. Y no hay duda de que nuestro país ha visto cambios políticos, económicos y sociales incomparables durante las últimas tres décadas.

Durante los años 80', la dictadura militar en Chile comenzó la implementación de reformas económicas neoliberales, traídas a Chile por los llamados "Chicago Boys", discípulos de Milton Friedman y su ideología del libre mercado. Partidarios de un Estado mínimo y de la "autorregulación" de los mercados, sus políticas privatizaron las empresas estatales, liberalizaron el comercio y se centraron en atraer la inversión extranjera (Ffrench-Davis, 2014). Como consecuencia, durante los años siguientes Chile experimentó un acelerado crecimiento económico

co. A pesar de la vuelta a la democracia en 1990, esta nueva ideología política y económica se mantuvo en gran parte inalterada durante los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, éstos sí llevaron a cabo una serie de políticas sociales que apuntaban a reducir las altas cifras de pobreza y desigualdad, en el marco de una política que se conoció como “crecimiento con equidad” (Raczynski, 1995). Entre los cambios más significativos se cuentan la implementación de una política habitacional que construyó viviendas sociales a un ritmo acelerado en las periferias de Santiago, y la creación de una nueva institucionalidad encargada de la asistencia social, en la que destaca el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Junto a lo anterior, se implementaron programas como Chile Solidario, destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esta manera, el conjunto de estos cambios económicos y políticos provocó durante los últimos 20 años una disminución significativa de las cifras oficiales de pobreza: de un 38,6% en 1990, pasando a un 21,7% en 1998 (Raczynski & Serrano, 2001), para finalmente alcanzar el 14,4% en el 2011 (Ministerio de Desarrollo Social, 2012).

Una evaluación autocomplaciente se daría por satisfecha con los resultados obtenidos, pues además de las cifras oficiales, Chile experimentó un nuevo nivel de bienestar material. Si para el año 1992 solo el 53% de los hogares chilenos tenía televisor a color o refrigerador, 10 años después esta proporción llegaba cerca del 90%. Incluso, para el año 2003, más de un 90% de los hogares que vivían en campamentos en la Región Metropolitana contaba con televisor y cocina a gas (Aritzía, 2004). Sin embargo,

y precisamente debido a estos cambios en los estándares de prosperidad económica y bienestar, debemos replantearnos lo que se entiende por pobreza. Esto es así porque esta es en gran parte una evaluación relativa: si bien se define como una privación inaceptable que impide alcanzar los estándares de vida que cada sociedad considera deseables (Spicker, 2009), la noción de “inaceptable” remite a un juicio moral que dependerá tanto de la cultura como del nivel de desarrollo de cada país.

Una primera alternativa de actualización es mejorar los instrumentos de medición ya existentes. Felipe Larraín (2008) propuso actualizar la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas (CSNB) –el instrumento oficial de medición de la pobreza en Chile-, ya que su composición no se correspondía con los patrones de consumo actuales de las familias chilenas. Utilizando la serie de Encuestas de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, el autor determinó que las mediciones oficiales estaban subestimando la pobreza real: al año 2006, por ejemplo, mientras las mediciones del MIDEPLAN arrojaban un 13,7% de pobreza, Larraín estimaba la pobreza real en un 29%. Teniendo este antecedente en consideración, el año 2013 la encuesta CASEN actualiza la CSNB, arrojando una cifra oficial de 14,4% de pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2014).³ A pesar de lo anterior, no basta solo con actua-

³ Nótese que esta cifra es igual a la del 2011, que utilizaba la medición tradicional. Según la CSNB actualizada, la pobreza real estimada para el 2011 habría correspondido a 22,2%.

lizar la medición, sino que es necesario reconceptualizar la pobreza misma y sus manifestaciones. Efectivamente, reducirla a ingresos es ignorar la complejidad de un problema social que destaca por su persistencia, muy a pesar del desarrollo económico. Spicker (2009) mostró en su trabajo cómo el concepto de pobreza no es unívoco, sino que remite a una multiplicidad de privaciones económicas, materiales y sociales. La pobreza ya no sería solo insatisfacción de necesidades básicas, sino que también incorpora las problemáticas de la desigualdad, la exclusión, la inestabilidad y la ausencia de recursos y de derechos sociales, que finalmente impiden el pleno desarrollo de las capacidades de los individuos (Sen, 1979). Las cifras ya no son suficientes para entender la pobreza, sino que se necesita indagar más profundamente en sus dinámicas. Así por ejemplo, si bien la desigualdad es un fenómeno de larga data en América Latina, crecientemente pasó a ser un problema económico de primera importancia, paralelo al crecimiento. Precisamente porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo (OCDE, 2011), y con una enorme concentración de la riqueza en el último quintil (Torche, 2005), se hizo imperativo observar entonces en qué se traduce esta diferencia, y cómo afecta las oportunidades de desarrollo de los menos favorecidos.

En esta línea, autores chilenos como Raczynski y Serrano (2001) o Manuel Tironi (2003) llamaron la atención sobre los nuevos problemas de la pobreza urbana, que aparece como más heterogénea y compleja. Por ejemplo, ya habiendo abordado el problema del déficit habitacional, el nuevo desafío de las políticas públicas es la segregación urbana, que corresponde al

fenómeno en el cual se generan barrios homogéneamente pobres, alejados del centro de la ciudad y de baja calidad en relación a su entorno (Aravena et. al., 2013). Como condición para la acelerada política habitacional de los 90', las viviendas sociales se construyeron en terrenos de bajo costo inmobiliario y con escasa planificación urbana (Rodríguez & Sugranyes, 2005). Como consecuencia, al año 2013 en Chile había 1,7 millones de personas viviendo en uno de estos barrios territorialmente segregados (Aravena et al, 2013). La situación es problemática: por un lado estos barrios presentan carencias urbanas importantes, relacionadas con la mala calidad de las viviendas, la escasa conectividad y el bajo acceso a servicios públicos. Por otro lado, existe una guetización importante, asociada al hacinamiento, el aumento de la delincuencia, la violencia, el tráfico de drogas y la deserción escolar, que generan un estigma para todos quienes habitan esos barrios (Sabatini & Brain, 2008; Aravena et. al., 2013). De este modo la política social, si bien solucionó el problema inmediato de los “sin techo”, profundizó aspectos de la pobreza que se relacionan con la falta de recursos para salir de ella.

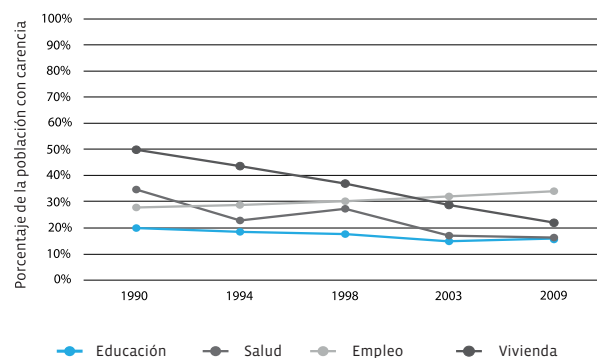
Junto a lo anterior, hay varias tendencias desarrolladas en la década del 2000 que generaron un aumento de la vulnerabilidad social, es decir, del riesgo para las familias de permanecer o caer en situación de pobreza. Por ejemplo, si bien hubo un importante aumento en la cobertura educacional, la calidad de la enseñanza impartida se encuentra fuertemente segmentada por nivel socioeconómico, algo que se re

fleja en el tipo de establecimiento al que acceden los estudiantes, la diferencia de puntajes en pruebas estandarizadas, y los niveles posteriores de acceso a la educación superior. Además, se ha producido una “devaluación educativa”: la proporción de personas con educación básica completa que estaban en un empleo no calificado aumentó de un 30,5% a un 42,6% en solo 10 años, lo que indica la exigencia de mayores niveles educacionales –a los cuales los quintiles bajos tienen grandes dificultades en acceder (Wormald, 2003). Por otro lado, el mismo autor también observa una creciente precarización del empleo: tanto el trabajo informal –sin contrato- como la ausencia de cotización previsional llegaron a niveles cercanos al 20%, lo que evidencia mayores niveles de riesgo en ausencia de protección social.

Como se aprecia en la descripción anterior, son muchos los problemas que configuran la complejidad de la nueva pobreza moderna. Es por esto que varios autores (Wormald, 2003; Denis, Gallego & Sanhueza, 2010; Gajardo, 2014) han enfatizado la importancia de dar paso a un nuevo paradigma de pobreza, que incorpore su carácter multidimensional. En Chile, uno de los instrumentos propuestos para esta tarea es el desarrollado por Denis, Gallegos y Sanhueza (2010), que combina el eje de ingresos con la perspectiva de vulnerabilidad, entendida como carencia en una o más dimensiones (vivienda, salud, educación y empleo), de acuerdo a los datos de la encuesta CASEN. Con esta metodología, las investigadoras obtuvieron información muy relevante respecto a los niveles y composición de la pobreza actual en Chile: para el año 2009 un 10,6% de los chilenos eran “pobres multidimensionales”, es decir, que se

encontraban bajo la línea de la pobreza en el eje de ingresos, y eran carentes en una o más dimensiones. Además de lo anterior, un considerable 46,4% de la población sería “vulnerable por carencias”. Esto quiere decir que, si bien están por sobre la línea de la pobreza en cuanto ingresos, presentan déficits en acceso o calidad en una o más de las dimensiones evaluadas. Por último, si se analizan por separado, en general los indicadores presentan tendencias a la baja, alcanzando en 2009 niveles cercanos al 15% en salud y educación, y 20% en vivienda. La excepción más significativa la constituye la dimensión empleo, cuya carencia ha aumentado desde un 27% en el año 1990, a un 34% en el 2009.

Gráfico 1: Pobreza multidimensional en Chile: 1990-2009



Fuente: Elaboración propia en base a Denis, Gallegos & Sanhueza (2010)

Estos nuevos datos dejan en evidencia la persistencia –pero a la vez el cambio- de la pobreza en Chile, a pesar del desarrollo económico y la mayor abundancia material. La nueva pobreza está caracterizada por el riesgo y la complejidad.

¿Cómo, entonces, podemos reconceptualizar este fenómeno, de manera que nuestra discusión capture realmente el problema? Una perspectiva especialmente útil es la que considera que hablar de pobreza en Chile es hablar de exclusión. Por exclusión entendemos el fenómeno en que la falta de recursos económicos incide en una serie de otras áreas, que van aislando a los pobres de los recursos sociales que necesitan para salir de la pobreza y desarrollarse en plenitud. Así, el concepto de pobreza incorpora una mayor diversidad de aspectos, que dan cuenta de la complejidad pero también de los mecanismos de la pobreza. En palabras de Subirats et. al. (2004):

“La exclusión social se define entonces como una situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social” (19).

Así, la pobreza en Chile tiene un carácter marcadamente excluyente, donde las posibilidades de participar no se ven mermadas sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito político, territorial, espacial, educacional y cultural. En palabras de Ariztía (2004), esta es una pobreza “que ya no se ancla en la esfera de las necesidades materiales de primer orden, sino que tiene su eje en las deficiencias y segregación social –necesidades de segundo nivel-.”(p. 49). Los pobres han visto aumentar su acceso a bienes, pero no han mejorado

sus pobres servicios y derechos. En este contexto, ¿qué rol cumple el crédito en la economía doméstica de las familias pobres, y en su capacidad para integrarse a esta sociedad crecientemente desigual?

2. El Crédito En La Sociedad De Mercado

Resulta muy difícil entender el fenómeno del boom crediticio si uno no lo sitúa dentro de un proceso más amplio y global, como es el paso desde una sociedad del trabajo a lo que los teóricos han llamado “sociedad del consumo”. La globalización, junto con las reformas políticas y económicas que experimentó nuestro país, no solo tuvo los efectos antes mencionados sobre el desarrollo y la pobreza, sino que también tiene una dimensión cultural, que ha transformado las pautas de convivencia de los chilenos. Por ejemplo, si antes la vida se orientaba hacia la producción, con el puesto de trabajo como gran estabilizador y fuente de sentido, hoy éste se comprende en función del consumo como principal foco de la vida cotidiana (Bauman, 2001). A diferencia de décadas anteriores, los trabajos son altamente inestables y flexibles, y el desempleo se ha vuelto una realidad que toda persona tendrá que enfrentar en algún momento de la vida (Beck, 2006). Esta transformación está asociada al redimensionamiento del Estado, que en el caso chileno abandonó abruptamente su rol como proveedor y principal organizador de la vida social, dejando cada vez más espacio a los mecanismos “autorregulados” del mercado (Lechner, 2003).

En ese contexto, la masificación del consumo y el crédito fueron parte esencial de las estrategias económicas implementadas en el país por los Chicago Boys en los 80'. En esencia, se pretendía lograr un mejor manejo de las crisis económicas al otorgar a los consumidores el papel de los principales activadores de la economía, para lo cual el crédito aparecía como una opción perfecta para fomentar ese consumo (Sanzana, 2011). Así, se popularizó este medio de pago que hasta entonces había sido entregado de manera exclusiva por los bancos a personas con antecedentes de bajo riesgo (Han, 2011). Posteriormente, en la década de los 90, la explosión del mercado tecnológico y electrónico, unido a la oferta de crédito por parte de entidades no bancarias, termina por consolidar al crédito como estrategia de financiamiento del consumo (Echeverría, 2014; Sanzana, 2011). Desde entonces la tendencia ha ido en aumento: la abundante oferta derivada de la liberalización del comercio, la multiplicación de los malls, la irrupción de nuevos estilos y tendencias que exigen adquirir sus respectivos productos, y el efecto de la publicidad que va invadiendo cada aspecto de la vida con los apremios de la moda y la innovación, progresivamente ponen al consumo en el centro de la idiosincrasia chilena, con el crédito como su fiel compañero (Moulian, 1999, Sanzana, 2011).

Norbert Lechner (2003), en su trabajo desarrollado desde el PNUD, indagó ampliamente en las consecuencias culturales de estos cambios, entre los que destaca el paso desde la acción colectiva -propia del mundo productivo clásico, donde los empleos eran duraderos, el sindicalismo más fuerte y su potencial identitario, mucho

mayor- a la estrategia individual del consumidor para resolver problemas. Junto con ello, el nuevo imaginario colectivo resalta la “libertad de elegir” como un derecho fundamental, que se realiza en el consumo. Tomás Moulian (1999) puso especial énfasis en este aspecto: para poder ejercer de manera instantánea y constante el rol de consumidor, la aparición de instituciones facilitadoras era un imperativo. Así, el mall es el lugar en el cual se exhibe la infinidad de bienes que la globalización ofrece, y el crédito es el medio de pago por excelencia, que permite la adquisición inmediata al tiempo que aplaza el trago amargo del desembolso.

Al año 2006, en Chile existían 21 millones de tarjetas de casas comerciales vigentes, para una población activa de 6,5 millones de personas (Sanzana, 2011). Entre 2011 y 2012, un 68% de los hogares del país tenían algún tipo de deuda, concentrándose la deuda bancaria en el estrato de más altos ingresos (asociada a hipotecas, crédito automotriz y crédito educacional), y la deuda de consumo (principalmente con casas comerciales) en los estratos más bajos (Banco Central de Chile, 2013). La razón promedio entre deuda total e ingreso anual de los hogares endeudados alcanza el 74,6%, es decir, los hogares utilizan casi tres cuartos del ingreso anual en pagar deudas contraídas anteriormente (Banco Central de Chile, 2013). Estas cifras dan cuenta de un crecimiento anual de la deuda cercano al 14%, versus un crecimiento de la economía de 3,6%. Aunque esta tendencia es similar a la experimentada en otros países emergentes, también es cierto que la carga financiera promedio en Chile (es decir, la razón entre la deuda y el ingreso mensual) es bastante más alta que la de países con PIB más alto, como son Italia, Suecia y

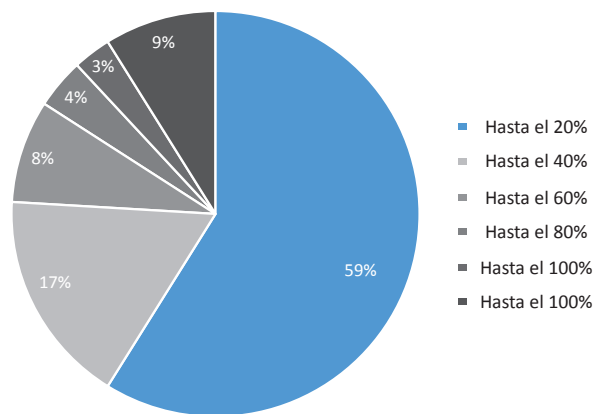
Alemania (Banco Central, 2010). En otras palabras, Chile es un país donde el crédito está jugando un rol clave en las economías domésticas.

Ahora bien, ¿cómo varía la realidad del crédito y de la deuda para los sectores más pobres del país? Lo cierto es que la deuda crece tanto con el ingreso como con la educación, con lo cual es menor en los estratos de más bajos ingresos. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, la composición de la deuda también es distinta: mientras que los estratos altos se endeudan para financiar activos (con crédito hipotecario y automotriz) y educación, los hogares de los primeros quintiles se endeudan para financiar consumo (Echeverría, 2014). Esto resulta especialmente problemático cuando consideramos que las tasas de interés de los créditos de consumo son las más altas del mercado, pudiendo alcanzar el 51,6% de interés (Banco Central, 2010; Echeverría, 2014). Esto, sumado al promedio más bajo de ingresos, termina en el hecho paradójico de que, si bien la deuda total de los sectores más pobres es menor, el porcentaje del ingreso mensual destinado a pagarla es considerablemente mayor: el promedio para el estrato 1 es de 45%, bajando a 31,9% para el estrato 2 y 25,4% para el estrato 3 (Echeverría, 2014).

Ilustrando esta situación, el siguiente gráfico indica el porcentaje de familias del programa Punte en cada tramo de carga financiera con casas comerciales. Este programa es la puerta de entrada al sistema Chile Solidario -columna vertebral de la asistencia social a las familias en situación de extrema pobreza-, y es ejecutado a través de las municipalidades, que otorgan apoyo psicosocial a las familias y actúan como enlace entre ellas y la red de promoción social (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). Vale la pena hacer este ejercicio,

pues, por un lado, ilustra el nivel de masificación del crédito, y por otro, lo intensivo de su uso, precisamente en los sectores más pobres. Si bien se observa que la mayoría de las familias se ubican en el tramo de menor carga, también vemos que casi una de cada cuatro familias (24%) utiliza más del 40% del ingreso mensual en pagar deudas de consumo. Esto es sin considerar cualquier otra deuda que tengan las familias con entidades bancarias, cajas de compensación, entre otras.

Gráfico 2: Carga de la deuda con casas comerciales en el ingreso familiar (Programa Punte)



Fuente: Encuesta de inclusión financiera, Departamento Estudios y Evaluación FOSIS (2012)

Con estos datos en mente, ¿será posible considerar al crédito como una forma efectiva de inclusión social de los sectores más pobres de la sociedad chilena?

3. Crédito Y Pobreza: Oportunidades Y Limitaciones

Como discutíamos en la sección anterior, el carácter dinámico e incierto de la sociedad globalizada hace que se busquen nuevas fuentes de estabilidad, y la principal es el consumo. Mediante éste se pueden adquirir y construir identidades, abasteciéndose con indicadores de quiénes somos, cuál es nuestro status y qué nos gusta (Bauman, 2001; Bauman, 2007; Han, 2011). Es en este sentido que el consumo se ha vuelto uno, si no el, factor de integración más importante en la sociedad actual.

De acuerdo a esto, la pobreza, en cuanto carencia, se reinterpreta como un cariz más de la exclusión: la incapacidad para el consumo se vuelve incapacidad para ser integrado a la sociedad y sus estándares de confort y bienestar. En *La posmodernidad y sus descontentos* (2001), Zygmunt Bauman plantea que las sociedades se caracterizan por un constante establecimiento de distinciones entre lo puro, lo “sucio” y lo extraño: donde “la pureza constituye un ideal, una visión de (...) lo que hay que proteger de los peligros reales e imaginarios” (p.14), lo sucio es “lo que está fuera de lugar (...), pero esa categoría está dada por la ubicación y no por cualidades intrínsecas.” (p.14), y finalmente lo extraño es aquello que “no encaja en el mapa cognitivo, moral o estético del mundo” (p.27). En la época posmoderna del consumo, muchas de las distinciones sociales estrictas se reblandecen, y lo que antes era transgresor, ahora es aceptado. Como supuesto que subyace a esta lógica, sin embargo, está el concepto de libertad individual; que como ya hemos visto, se concreta como libertad expresada en el consumo.

Dentro de este modelo, los pobres entran dentro de lo que se considera extraño: muestran los límites del concepto de libertad entendido como libertad para consumir, y arriesgan, con su sola presencia, la pureza de ese ideal. En este sentido es que son apartados, lo cual, como hemos visto antes, ocurre tanto física como simbólicamente. Sin embargo, esa exclusión no es total: la publicidad bombardea a todos por igual, el acceso a bienes de consumo por parte de la sociedad en general es visible, y la globalización pone en vitrina estilos de vida tentadores para todos (Sanzana, 2011). La pobreza no escapa de la búsqueda de integración mediante el consumo, con la sola diferencia de que no tiene los medios para conseguirla:

“Como la viabilidad de una redistribución promovida socialmente de todo aquello que resulta deseable como consumidor se está desvaneciendo, a los que no pueden participar en el festín consumista y, por consiguiente, no están debidamente regulados por el poder de seducción del mercado, no les queda más que una línea de acción factible para alcanzar los estándares que la sociedad de consumo promueve: empeñarse en alcanzar directamente los fines sin desplegar primero los medios. Después de todo, resulta imposible desplegar lo que no se posee” (Bauman, 2001, p. 56)

De acuerdo a lo anterior, el papel del crédito como herramienta de integración cobra sentido. Justamente, se presenta como una posibilidad de integración dentro del sistema. Mediante él se puede consumir sin recurrir a otros y de manera inmediata, accediendo a la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales básicas, además de la necesidad social fundamental

de identidad e inclusión. Cuando el acceso a crédito se popularizó durante la dictadura, precisamente se presentó bajo esos términos: como una posibilidad para los pobres de optar a una vida digna (Han, 2011). La teoría económica ha sido enfática en señalar cómo el acceso a crédito puede ayudar a suavizar el consumo de las familias más pobres, promoviendo su bienestar y ayudando a una mayor equidad (Banco Central, 2010). Conviene aclarar que sería un error pensar esa “dignidad” sólo en términos de cobertura de necesidades básicas: de hecho, gran parte del crédito de consumo en los sectores pobres se utiliza en tecnología, cuidado de la casa y vestuario (Aritzía, 204; Sanzana, 2011). La dignidad pasa aquí por la posibilidad de disfrutar de algunos de los lujos que disfrutaban los demás, por dejar de sentirse distintos, por poder adquirir un estatus y representarlo por medio de los objetos (Han, 2011). Aquí el rol del consumo se ubica por sobre la satisfacción de las necesidades de primer orden.

Por otro lado, la estructura misma del crédito, el hecho de que pueda ser pagado a futuro, provee a las familias con una sensación de esperanza, al expandir el horizonte temporal de sus posibilidades (Han, 2011). Diversos autores habían identificado previamente la desesperanza y la resignación como algunos de los sentimientos predominantes en los hogares pobres (Lechner, 2003; Raczynski & Serrano, 2002), expresadas como un fuerte escepticismo en cuanto a la mejora de su calidad de vida. Como bien identificó Moulian (1999), ante un mundo del trabajo precario e inestable, ahora es el consumo el que provee mayores oportunidades de realización y disfrute personal. Por eso, el “presentismo” cobra relevancia como actitud cotidiana: en lu-

gar de ahorrar con vistas a construir un futuro incierto, se prefiere el consumo como forma de mejorar el bienestar presente (Lechner, 2003). Hasta aquí, el crédito se presenta como una alternativa al alcance de la mano para acceder a todo aquello que los excluidos no acceden: bienes y servicios, por supuesto, pero también la sensación de ser parte de la trama social por medio del consumo, participando del cambio cultural. De esta manera, el crédito tiene el potencial de ser una poderosa herramienta de inclusión para las familias más pobres del país. Sin embargo, la cara amable del crédito no debe hacernos olvidar sus consecuencias y efectos colaterales, siendo la más obvia el endeudamiento que trae. Anteriormente hemos explicado cómo la carga financiera es más pesada para el estrato más bajo de la población, tanto por su nivel de ingreso como por la composición de la deuda. Ahora nos detendremos en los efectos a largo plazo que la deuda crónica tiene sobre la pobreza.

En primer lugar, como hemos explicado antes, los sectores de menor ingreso concentran su deuda en créditos de consumo, principalmente porque muchas casas comerciales ofrecen este tipo de créditos de forma universal, sin poner ningún tipo de requisito o antecedente económico para ello. Es así como incluso estudiantes o dueñas de casa, que no generan ingresos propios, son aptos para recibir una tarjeta de una casa comercial (Sanzana, 2011), mientras que los créditos bancarios permanecen más selectivos. Esta diferencia es fundamental: mientras que un crédito hipotecario o educacional ofrece

un bien o servicio que a la larga representa una inversión, los créditos de consumo financian bienes de corta duración, ya sea por desgaste o moda, posponiendo el pago para un futuro en el que estarán progresivamente deteriorados (Moulian, 1999). Todo esto, *“sin que eso implique una reducción en las cuotas de pago, que suelen aumentar por su ajuste a la inflación y el pago de intereses”* (Hopenhayn, 2002, p. 345). En esta línea, a nivel nacional, en Chile se ve una tendencia a relegar a segundo plano elementos tradicionales de movilidad social, como el ahorro, la educación y el emprendimiento, priorizando bienes de consumo suntuarios, con lo cual se perpetúa la pobreza (Sanzana, 2011).

Por otro lado, otro de los riesgos más evidentes del crédito y la deuda de consumo es la incapacidad de pago. Para los dos quintiles de más bajo ingreso, en promedio un 82% de los ingresos provienen del trabajo, siendo escasos los ahorros, pensiones o activos que puedan complementarlos (Banco Central, 2010). Esto ocurre para un grupo económico donde el empleo es especialmente precario: suele ser trabajo manual o no manual rutinario, y con bajas calificaciones. Por lo mismo, resulta especialmente fácil de supervisar y no necesita de mucha capacitación, lo que genera pocos incentivos al empleador para ofrecer contratos estables, lo cual vuelve a este grupo especialmente vulnerable a la hora de los despidos (Goldthorpe & McNight, 2006). Además, debemos considerar que Chile es un país caracterizado por su alta fluidez en los deciles intermedios, lo cual funciona tanto hacia arriba como hacia abajo (Sanzana, 2011; Torche, 2005). Cuando las familias postergan elementos de movilidad social tales como la educación, el ahorro y el emprendimiento, y en cambio se

ven sometidas a endeudamiento constante, la pérdida del trabajo del jefe de familia podría ser suficiente para una caída o recaída en la pobreza. Esto también puede generar una tendencia compulsiva, en la medida en que mayores niveles de endeudamiento o períodos de pérdida de solvencia del deudor llevan muchas veces a una mayor solicitud de crédito. Por todo lo anterior, el crédito representa una fuente adicional y potencialmente agresiva de vulnerabilidad para estos sectores.

Por último, si bien el mercado de créditos de consumo pone pocas restricciones para otorgarlos, no escatima en recursos a la hora de cobrar. Y tampoco perdona. Así es como hicieron aparición empresas como DICOM, que generaron listados de morosos para la posterior venta y traspaso de esta información a petición de terceros. Si bien la Ley DICOM del año 2012 prohibió consultar esta información en procesos de selección de personal, acceso a la educación, atención médica y postulación a cargos públicos -práctica que era común y fomentaba la exclusión del mercado laboral (Viñuela, 2012), el llegar a este listado aún tiene importantes consecuencias, puesto que todavía puede ser utilizado por las instituciones que calculan el riesgo crediticio (Biblioteca del Congreso Nacional, 2012), impidiendo la “rehabilitación” del consumidor a futuro (Sanzana, 2011) y excluyéndolo así de todas las posibilidades de integración discutidas más arriba.

4. Hacia Una Visión Más Integral Del Fenómeno

Hasta aquí, hemos analizado cuáles son los alcances y limitaciones del crédito sobre la pobreza. En gran parte, el análisis se ha basado en las observaciones que varios sociólogos hicieron sobre el tema en las últimas décadas. Sin embargo, lo que queremos hacer ahora es insertar este análisis en la discusión más amplia sobre pobreza, esa que definíamos al principio como exclusión multidimensional. ¿Cómo afectan estas características del crédito a otras aristas de la pobreza, a otras áreas de vulnerabilidad? ¿Qué relación pueden guardar el consumo y la deuda con aspectos tan variados como la participación, la convivencia, el empleo o la educación? Para responder estas preguntas, seguiremos la perspectiva ofrecida por Wormald (2003), según la cual todo análisis de pobreza debe hacer dialogar el nivel macrosocial –la estructura de oportunidades institucionales– y el nivel microsocial –los recursos y capacidades de personas y hogares. La interacción entre ambos aspectos nos puede dar una idea más clara de la relación que existe entre crédito y pobreza.

Como vimos, el boom del crédito se ha desarrollado en un contexto favorable a sus lógicas internas. La sociedad de mercado y la exaltación de la “libertad de elegir” tienen en común el supuesto de un individuo libre y maximizador de beneficios. A diferencia de los modos de integración de épocas anteriores, centrados en la producción, el consumo es un acto profundamente individual (Bauman, 2001). Cuando la trama social se construye en torno a un acto así, muchos de los problemas que antes se entendían como

sociales pasan a vivirse como dramas personales (Beck, 2006). La pobreza es un caso paradigmático: ahí donde antes se veía un problema estructural, la culpa se desplaza al individuo y sus decisiones. Así, por ejemplo, pueden construirse lugares comunes como “el problema en el acceso a educación de calidad es la falta de información de las familias”, o “las personas tienen poco conocimiento financiero, por eso se endeudan”. En ambos ejemplos, se desplaza la atención desde los déficits o desregulaciones del sistema, y se sindicada al individuo como principal responsable.

Esto tiene consecuencias muy sensibles sobre la democracia y la participación. En palabras de Han (2011): *“mediante el acceso al crédito, el mercado ha reemplazado las nociones convencionales de comunidad y afiliación política, actuando como el ‘aparato de la integración social’. Los derechos políticos son construidos por el Estado como derechos del consumidor.”* (p. 11). Mientras que los derechos de un ciudadano del Estado son inalienables y propios de la comunidad, el mercado goza de plena libertad para expulsar a quienes no quieren o no son capaces de cumplir con sus reglas del juego. Y así, aquello que se alcanzó como una conquista individual puede también convertirse en un drama y un estigma social que excluya a las personas de la sociedad de consumo sin mayores dilaciones.

El consumo y la deuda tienen la capacidad de hacerle sentir al individuo una desconexión cada vez mayor entre su destino personal y el de su comunidad. Lechner (2003), por ejemplo, se refirió con preocupación al *“familismo*

amoral” que proliferó en la sociedad chilena. Ante la inestabilidad del trabajo, el peso de la deuda y la inseguridad de los barrios, las familias pobres se replegaron cada vez más sobre sí mismas, al tiempo que se desentendieron de la comunidad. Lo anterior se resume en una frase: **“cada cual tiene que arreglárselas como pueda porque la política no sirve para nada”** (Lechner, 2003)⁴. En datos más recientes, la Encuesta de Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre Participación Ciudadana 2008, arrojó que un 46,9% de los encuestados no había participado en ninguna organización (Yáñez, 2009). Esta progresiva disminución de la capacidad de asociación y formación de capital social puede relacionarse con varias problemáticas actuales de la pobreza. Por ejemplo, los altos niveles de inseguridad y violencia que presentan los barrios segregados -ya sea porque el retraimiento genera comportamientos individuales anómicos de protesta, o por la ausencia de una comunidad consolidada que resguarde la convivencia-

El aislamiento también tiene fuertes consecuencias en el ámbito del empleo. Han (2011) sugiere que en nuestra época la disciplina propia de la modernidad, externa y restrictiva, se ha diluido en una serie de mecanismos de mercado que mantienen el control de las masas, internalizados por los propios individuos. La deuda es uno de esos mecanismos. En palabras simples, podríamos decir que un hombre endeudado no

se arriesga a perder su trabajo yendo a huelga, no porque alguien se lo prohíba, sino porque sabe que no puede correr el riesgo del despido. Moulian (1999) advirtió oportunamente el potencial despolitizador del crédito, que ata al consumidor al trabajo para mantener el estilo de vida que adquirió a través de él. Este efecto es especialmente fuerte cuando se despliega en un contexto de baja protección laboral, producto de las reformas neoliberales que perduran hasta hoy en Chile: el reemplazo en huelga, la subcontratación, las trabas a la sindicalización o el bajo poder de negociación colectiva (Moulian, 1999). A esto se suma el hecho de que el crédito ha presentado muchos de los objetivos de la lucha social como alcanzables por los propios medios, con lo cual se vuelve más complejo articular movimientos de protesta.

Puede parecer exagerado ligar esta serie de ámbitos al efecto de la deuda, sobre todo cuando se piensa que es solo un aspecto de los muchos que intervienen en nuestra definición de pobreza. Sin embargo, esto se explica cuando consideramos que en Chile hay una estrecha ligazón entre el nivel de ingresos y el bienestar al que pueden optar las familias. En ausencia de un Estado que otorgue protección social efectiva a sus ciudadanos, ya sea a través de la provisión directa o la consagración de derechos sociales, la calidad de vida a la que se accede depende directamente del nivel socioeconómico de los ciudadanos. Es por eso que una deuda puede tener consecuencias tan profundas, pues genera un efecto dominó que excluye inmediatamente al individuo de todos aquellos servicios que dependen del pago privado. Esto es especialmente cierto en sistemas como el de la salud o la educación, que en Chile se encuentran fuertemente

⁴ Parfraseo de una de las preguntas incluidas en el Informe de Desarrollo Humano 2002 para Chile, elaborado por el PNUD. En resultado preocupante, un cuarto de los entrevistados se sintieron representados por esta frase.

segregados por nivel socioeconómico.⁵

Antes de concluir, es necesario hacer una aclaración fundamental respecto al análisis que hasta aquí hemos realizado. Las observaciones anteriores en modo alguno deben interpretarse como explicaciones monocausales, donde el crédito “produce” las carencias mencionadas. En cambio, lo que pretendemos evidenciar es la relación recíproca entre la estructura de oportunidades institucionales –nivel macrosocial- y los recursos de las familias pobres –en este caso, el crédito-. Como ya hemos visto, en esta relación intervienen varias tendencias, algunas económicas –mercados desregulados, provisión estatal limitada- otras culturales –el individualismo y el consumismo-. Así, cuando la deuda se combina con un código laboral que otorga pocos derechos y garantías a los trabajadores, barrios homogéneamente pobres, y, sobre todo, un sistema donde el bienestar de cada uno depende casi enteramente de su nivel socioeconómico, entonces tenemos una mayor probabilidad de que el uso del crédito represente una fuente de vulnerabilidad social.

⁵ Para una revisión más detallada de este fenómeno, se puede revisar el informe sobre Chile “Education at a Glance 2014” elaborado por la OCDE, disponible en: <http://www.oecd.org/edu/Chile-EAG2014-Country-Note.pdf>. Algo similar ocurre con la salud, donde el gasto público llega a menos de la mitad del total (46%): <http://www.oecd.org/els/health-systems/Country-Note-CHILE-OECD-Health-Statistics-2015.pdf>

5. Conclusiones

A lo largo del artículo hemos actualizado la clásica discusión sociológica sobre la relación entre consumo, crédito y pobreza. Para esto, primero hicimos un recorrido sobre los principales cambios en el nivel y características de la pobreza en Chile durante las últimas tres décadas. Ésta ya no puede limitarse solo a una falta de ingresos o una carencia material, sino que tiene un carácter heterogéneo y dinámico. Para capturar mejor este fenómeno, utilizamos los conceptos de pobreza multidimensional y exclusión, abarcando ámbitos como la desigualdad económica, la segregación urbana o el deterioro de las condiciones laborales y educativas de los sectores más pobres del país. Luego, analizamos las características más importantes del crédito en Chile, sin ignorar el contexto social en el que se despliega. En un proceso de desarrollo crecientemente global y al alero de una sociedad de mercado, el crédito presenta un potencial de integración importante al permitir a los pobres participar de los estándares de consumo modernos. Al mismo tiempo, la deuda aparece como uno de los principales riesgos de esta forma de pago, capaz de perpetuar o agravar la pobreza de las familias. Por último, pusimos este análisis del crédito en relación con las formas de vulnerabilidad descritas en la primera parte. De esta forma, se puso en evidencia la sinergia que se produce entre la falta de oportunidades institucionales y los constreñimientos económicos personales, haciendo aún más difícil para las familias superar su condición de pobreza y desarrollarse en plenitud.

Subirats et. al. (2004) plantean, como pilares de la inclusión social, la participación política, cultural-social y la participación en la producción de valor. Vemos entonces cómo el endeudamiento entorpece una inclusión efectiva al dificultar la participación política y social, reflejar las inequidades sociales y promover una estrategia individualista de desarrollo. En su lugar, proporciona soluciones materiales y de corto plazo, mientras que la deuda desincentiva la articulación de respuestas colectivas a problemas que son compartidos por amplios sectores de la población, como lo son la lucha por el acceso a una educación de calidad, el derecho a hacer uso de los espacios públicos de la ciudad, la búsqueda de mejores condiciones laborales, entre muchos otros. En este sentido, si bien el crédito da la posibilidad de participar del consumo, integrando así a los pobres a la trama social, genera una serie de desventajas en otros ámbitos del desarrollo.

¿Cómo pueden atenuarse los efectos contraproducentes del crédito y la deuda? La respuesta, creemos, pasa por otorgar mayor estabilidad a las familias, de manera que la deuda no deteriore de manera tan agresiva su bienestar. Si el riesgo y la inestabilidad son características propias de la modernidad globalizada, especialmente cuando se refiere a empleo, entonces parece evidente que el bienestar de las familias no debe depender enteramente de los ingresos, pues si éstos se ven disminuidos el impacto sobre la calidad de vida puede ser demasiado fuerte. Una manera de atenuar esto pasa por el aseguramiento de pisos mínimos garantizados como derechos sociales, de manera que no dependan del nivel de ingreso. Esto, no solo porque de esta manera se eliminan carencias que son cruciales

en el análisis de la vulnerabilidad, sino también porque en ese tipo de políticas universales hay una tendencia contraria a la solución individualista y a la segregación socioeconómica. Al mismo tiempo, si lo que se busca es que la población pueda hacer un “mejor uso” del crédito mismo, la solución no puede limitarse a instancias de educación financiera, exigir transparencia o mejorar las vías de información. Todo lo anterior es útil, pero no reemplaza la necesidad de una mejora sustantiva en la regulación laboral y financiera.

En síntesis, es necesario buscar mecanismos institucionales que otorguen mayor seguridad y estabilidad a las familias más pobres del país, disminuyendo las carencias que los hacen más vulnerables ante una baja de ingresos. De esta manera se puede atenuar el riesgo de la deuda, permitiendo que los sectores socioeconómicos más bajos participen también de los beneficios de la economía moderna.

Bibliografía

Aravena, A, De Gregorio, J, & Poduje, I. (2013). *Vía rápida para reducir la desigualdad: Propuestas para revertir la segregación urbana en nuestras ciudades.* Santiago: Espacio Público.

Ariztía, T. (2004). *Nueva pobreza, patrimonio y sociedad de consumo.* Revista CIS, 3(4), 46-53.

Banco Central de Chile. (2010). *Endeudamiento de los hogares en Chile: Análisis e implicancias para la estabilidad financiera.* Santiago: Informe de Estabilidad Financiera.

Banco Central de Chile. (2013). *Encuesta Financiera de Hogares: Metodología y Principales Resultados EFH 2011-12.* Santiago: Gerencia de Investigación Financiera.

Bauman, Z. (2001). *La posmodernidad y sus descontentos.* Madrid: Ediciones Akal.

Bauman, Z. (2007). *Vida de consumo.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Beck, U. (2006). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad.* Madrid: Paidós.

Biblioteca del Congreso Nacional. (2012). *Ficha Básica Ley Dicom. Obtenido desde sitio web Biblioteca del Congreso Nacional:* <http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-dicom>

Denis, A., Gallegos, F., & Sanhueza, C. (2010). *Pobreza multidimensional en Chile: 1990-2009.* Documentos de Investigación, ILADES/Universidad Alberto Hurtado.

Echeverría, F. (2014). *Endeudamiento y pobreza en Chile.* Santiago: IdeaPaís.

Ffrench-Davis, R. (2014). *Desigualdad y Pobreza desde los Setenta. En R. Ffrench-Davis, Chile entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad: Cuarenta años de políticas económicas y sus lecciones para el futuro (págs. 291-349).* Santiago: JC Sáez.

FOSIS. (Abril del 2012). *Encuesta de Inclusión Financiera. Resultados Finales: “En búsqueda de estrategias pertinentes de inclusión financiera para familias en condición de extrema pobreza”.* Obtenido de sitio web FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social: <http://www.fosis.cl/index.php/estudios-y-evaluaciones/2421-encuesta-de-inclusion-financiera>

Gajardo, F. (2014). *Medición multidimensional de la pobreza en Chile. ¿Se está midiendo a quienes viven bajo el fenómeno?* Revista CIS, 17(2), 26-49.
Goldthorpe, J., & McNight, A. (2006). *The economic basis of social class. En J. Goldthorpe, & A. McNight, Mobility and inequality: frontiers of research in sociology and economy (págs. 109-137).* Stanford University Press: Morgan, Grusky & Fields.

Han, C. (2011). *Symptoms of another life: Time, Possibility and Domestic Relations in Chile's Credit Economy.* Cultural Anthropology, 7-32.

Hopenhayn, M. (2002). *¿Qué hacer con el dinero?* Estudio Públicos, 335-351.

Larraín, F. (2008). *Cuatro millones de pobres en Chile: actualizando la línea de pobreza.* Estudios Públicos, (109), 101-148.

Lechner, N. (2003). *Los desafíos políticos del cambio cultural*. Nueva Sociedad, 184, 46-65.

Ministerio de Desarrollo Social. (2012). *Indicadores de Pobreza CASEN 2011*. Obtenido de Observatorio Social Ministerio de Desarrollo Social: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/casen/pobreza_casen_2011.pdf

Ministerio de Desarrollo Social. (Enero del 2014). *CASEN 2013. Situación de la Pobreza en Chile. Presentación de la nueva metodología de medición de la pobreza y síntesis de los principales resultados*. Obtenido de Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Situacion_Pobreza_Chile.pdf

Ministerio de Desarrollo Social. (9 de agosto del 2015). *¿Qué es el programa Puente?* Obtenido de sitio web Chile Solidario: http://www.chilesolidario.gob.cl/preg/07_preguntas.php Moulían, T. (1999). El consumo me consume. Santiago: LOM.

OCDE (2011). *Mejores políticas para el desarrollo: perspectivas OCDE sobre Chile*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264095755-es>

Raczynski, D. (1995). *La estrategia para combatir la pobreza en Chile. Programas, instituciones y recursos*. En D. Raczynski, "Estrategias para combatir la pobreza en América Latina: Programas, instituciones y recursos" (p.217 – 274). Santiago: BID.

Raczynski, D. & Serrano, C. (2001). "Nuevos y viejos problemas en la lucha contra la pobreza en Chile". Asesorías para el Desarrollo, Santiago.

Rodríguez, A., & Sugranyes, A. (2005). *El proble-*

ma de los "con techo". En A. Rodríguez, & A. Sugranyes, *Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social* (págs. 59-78). Santiago: Ediciones Sur.

Sabatini, F., & Brain, I. (2008). *La segregación, los guetos y la integración urbana: mitos y claves*. EURE, 5-26.

Sanzana, A. (2011). *Consumo, endeudamiento y vulnerabilidad a la pobreza*. Proyecto Desigualdades Universidad de Chile, 1-16.

Sen, A. (1979). *¿Igualdad de qué? Ciclo Tanner de Conferencias sobre los Valores Humanos* (págs. 135-156). California: Universidad de Stanford.
Spicker, P. (2009). *Definiciones de Pobreza: Doce grupos de significados*. *Pobreza: Un glosario internacional*, 291-306.

Subirats, J, Riba, C, Giménez, L, Obradors, A, Giménez, M, Queralt, D, y otros. (2004). *La exclusión social: debates y concepto*. En J. Subirats, C. Riba, L. Giménez, A. Obradors, M. Giménez, D. Queralt, y otros, *Pobreza y exclusión social: un análisis de la realidad española y europea* (págs. 10-34). Barcelona: Fundación La Caixa.

Tironi, M. (2003). *Nueva pobreza urbana: vivienda y capital social en Santiago de Chile, 1985-2001*. Santiago: Universidad de Chile/PREDES/RIL Editores.

Torche, F. (2005). *Unequal but Fluid: Social Mobility in Chile in Comparative Perspective*. *American Sociological Review*, 70(3), 422-450.

Viñuela, J. (2012). *DICOM en la opinión pública:*

análisis de una controversia social y técnica. En J. Ossandón, Destapando la Caja Negra: Sociologías de los Créditos de Consumo en Chile (págs. 70-90). Santiago: Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Universidad Diego Portales.

Wormald, G. (2003). *Algunas reflexiones sobre pobreza y vulnerabilidad social.* Revista CIS, 3, 41-46.

Yáñez, M. (2009). *Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre Participación Ciudadana en Chile. Al año 2008 y visión evolutiva desde el año 2003 (Resumen Ejecutivo).* Santiago, Universidad Católica Silva Henríquez.